

## La Comunidad Financiera y el Desarrollo Sostenible

Stephan Schmidheiny - Federico J. L. Zorraquín

1. Introducción
2. Capítulo 1

### 1. Introducción

En este libro formulamos una pregunta, intentamos darle respuesta y, en el curso de este proceso, hacemos algunas propuestas tentativas sobre cómo podrían los mercados financieros comenzar a apoyar los objetivos de la eco-eficiencia y el desarrollo sostenible.

#### *La pregunta*

¿Constituyen los mercados financieros del mundo –y quienes trabajan en y con ellos– una fuerza positiva que impulsa el progreso humano sostenible? ¿O representan, por el contrario, un impedimento para el logro de ese objetivo?

Esta pregunta reconoce el papel crítico que desempeñan los mercados financieros con respecto a la forma en que organizamos nuestra vida comercial, industrial y personal. Reconoce que cualquier forma de desarrollo –sostenible o no– tiene que ser, en gran medida, financiada por esos mercados. Existen pruebas suficientes como para avalar el punto de vista de que muchas de nuestras actividades actuales no son sostenibles en el largo plazo y que traban o limitan las oportunidades para una gran parte de la población mundial, en acelerada expansión.

Esta comprobación conduce a otras dos preguntas fundamentales:

¿Estimulan y apoyan los mercados financieros una actitud que tenga por único objetivo la rentabilidad a corto plazo e ignora, en gran parte, la realidad humana y ambiental de nuestros tiempos? ¿O ellos son sólo herramientas que reflejan las preocupaciones humanas fundamentales y, por lo tanto, mostrarán con el tiempo una preocupación por la pobreza y la degradación de la naturaleza que se traducirá en recompensas para aquellas empresas que tratan al hombre y al ambiente con responsabilidad?

#### *La respuesta*

A pesar de que la pregunta es simple y concreta, la contestación es, inevitablemente, mucho más compleja. En un intento de hallar respuesta a los interrogantes planteados, hemos analizado el funcionamiento de los mercados financieros –tanto de los ya establecidos como de los emergentes– y los papeles que desempeñan los distintos actores clave del mundo de las finanzas.

Queríamos ver de qué manera esos actores responden a las exigencias ambientales que enfrentan en la práctica de sus respectivas profesiones. Los resultados son ambivalentes, pero hemos encontrado evidencias positivas suficientes como para refutar, al menos en parte, el axioma heredado de que la comunidad financiera, en el mejor de los casos, desconoce el concepto del desarrollo sostenible, o, en el peor, lo ignora y lo rechaza.

Hemos advertido que dichos protagonistas, no sólo tienen mayor conciencia de estos temas de lo que sus críticos admiten, sino que muchos de ellos están tratando de abordar y resolver las complejidades que conlleva el debate de los mismos. Algunos, como los aseguradores –aunque más no sea por un instinto de autoconservación–, han comenzado a tomar medidas para lograr que sus actividades contribuyan a un futuro sostenible, en lugar de trabar el avance hacia él.

Los **líderes empresarios** –altos ejecutivos, miembros de directorios y propietarios de empresas– fueron los primeros en percibir los efectos del cambio ambiental. Es así como muchos de los grandes grupos industriales se han tornado más eco-eficientes, es decir, agregan más valor a la vez que insumen menos recursos y producen menos contaminación. A raíz de su responsabilidad frente a sus directorios y accionistas, los altos ejecutivos de esos consorcios tuvieron que comprender y acomodar las necesidades, a menudo contradictorias, de sus principales grupos de interés y, a partir de allí, forjar estrechas relaciones con los mismos. Asimismo, hemos observado que quienes se encuentran al frente de pequeñas y medianas empresas se ven en la necesidad de ponerse rápidamente al día en estos temas.

*Instamos a todos los líderes industriales a que incorporen en sus empresas una actitud proactiva hacia el desarrollo sostenible a fin de que, cuando los mercados comiencen a premiar la eco-eficiencia en forma más sistemática, se encuentren con sus estrategias implementadas, sus equipos humanos adecuadamente entrenados y capacitados, y puedan contar, además, con la lealtad de sus respectivos grupos de interés.*

Los principales **inversores** en valores bursátiles (títulos y acciones) rehusan en su gran mayoría preocuparse por el ambiente, ya que consideran que la ecología constituye un tema moral fuera de su esfera de influencia. Quienes se dedican, en el mundo financiero, a manejar los fondos de otros hacen hincapié en su obligación principal de maximizar las ganancias sobre inversiones, lo cual no toma en consideración temas éticos como la conservación del ambiente o la justicia social. Sin embargo, aun aceptando esa actitud, hemos detectado señales de cambio. Los inversores están comenzando a analizar los costos ambientales y el potencial pasivo ambiental de las empresas, y cómo estos temas inciden sobre el rendimiento de las acciones. Un sector de inversores y agentes financieros –que si bien minoritario se está haciendo oír– está ampliando su interpretación del término “responsabilidad fiduciaria”. Algunos incluso han comenzado a cuestionar la definición del concepto de “prudencia” proveniente del siglo pasado, y a buscar nuevas formas de incorporar las preocupaciones sociales de la actualidad. Existen ya algunos fondos de pensiones que destinan pequeñas sumas de dinero a inversiones en proyectos socialmente importantes pero riesgosos en lo financiero. Y los llamados “inversores éticos” están utilizando su posición en los mercados para crear un diálogo con las cúpulas directivas de las empresas en torno de la importancia de la eco-eficiencia.

*Es necesario encontrar formas y maneras de ayudar a que en los mercados se desarrolle una mejor comprensión del ambiente y, probablemente, una de ellas sea poniéndole un precio. Esto se puede lograr a través de políticas que utilicen los mecanismos del mercado, tales como la emisión de certificados comercializables. En términos más amplios, y en interés de mercados más eficientes, los “dueños” del capital, que en la actualidad están alejados de la forma en que ese capital opera –por ejemplo, rentistas y accionistas–, deberían recibir la información necesaria para que puedan influir sobre quienes toman las decisiones en su nombre.*

Los **banqueros** saben que, en determinadas circunstancias y a través del sistema legal, la sociedad los puede hacer responsables de los daños ambientales de sus prestatarios. A fin de reducir sus riesgos, los banqueros han comenzado a tener en cuenta la eco-eficiencia cuando toman decisiones sobre préstamos y créditos, partiendo de la premisa de que una empresa de mal desempeño ambiental constituye un alto riesgo financiero. Este sector ha empezado a comprender que la capacidad crediticia de una empresa depende, cada vez en mayor medida, de su eco-eficiencia. *Los bancos líderes han reducido en gran medida su propia exposición al riesgo ambiental, pero sugerimos que los banqueros procuren cada vez más ofrecer productos y servicios que también ayuden a los demás a reducir sus propios riesgos.*

Los **aseguradores** ya han sufrido daños financieros directos a causa de problemas ecológicos. Se calcula que, en los Estados Unidos, las demandas, basadas en leyes de responsabilidad general, por daños por exposición a amianto y por manejo de residuos tóxicos cuestan alrededor de U\$S 2 billones por año a las compañías de seguros. Ahora, los aseguradores están preocupados por las posibilidades de cambios climáticos y la forma en que ellos podrían afectar, en el futuro, a sus negocios. En este sector hay quienes afirman que los aseguradores deberían tomar conciencia de que sus intereses difieren diametralmente de aquellos de los vendedores o grandes consumidores de combustibles en base a carbono, nucleados en el llamado *Carbon Club*. Una propuesta que está ganando cada vez más apoyo en el sector es que las aseguradoras presionen a favor de la sanción de leyes que reduzcan los riesgos del cambio climático.

*Recomendamos que las aseguradoras utilicen su experiencia con desperdicios tóxicos como modelo para manejarse frente a la amenaza de los cambios climáticos. Cuanto menos, este sector debería reconocer que sus intereses difieren de los de la industria pesada, mucho más astuta políticamente y en forma pública, acostumbrada a defenderse.*

Los **contadores** saben que muchos de sus colegas de la comunidad financiera esperan que inventen sistemas que permitan poner en números los riesgos y las oportunidades ambientales. Los auditores, en particular, son muy conscientes del papel que desempeñan en cuanto a la verificación de que la contabilidad empresaria refleje en forma veraz la viabilidad de una compañía en un mundo cambiante. Pero los contadores se encuentran en una posición difícil. Pueden actuar de acuerdo con las reglas de juego, que excluyen la mayor parte de las preocupaciones ecológicas, pero también comprenden que es su tarea encontrar la forma de valorar todo aquello que la sociedad valora, lo que significa fijar un precio para todas esas cosas que ahora se consideran como externas a la contabilidad; por ejemplo, el daño a los recursos naturales comunes.

En los ámbitos académicos de la profesión hay personas muy versadas en el tema de la sostenibilidad que han ofrecido ya ideas prácticas respecto de cómo la actividad contable puede llegar a incluir esos conceptos. Algunos de esos profesionales –sobre todo quienes asesoran a empresas involucradas en fusiones y adquisiciones– han demostrado gran capacidad y rapidez para identificar los riesgos ambientales que afectan el valor de las empresas, y esas decisiones se han reflejado en los mercados.

*Sugerimos que los contadores procuren ayudar a las empresas eco-eficientes a difundir sus adelantos (y los beneficios de los mismos para sus negocios) en los mercados, para luego ayudar a dichos mercados a que comprendan tales beneficios, a fin de otorgar los premios a quienes lo merezcan.*

Un importante apoyo potencial para los contadores es el que pueden brindar los **calificadores** de riesgo, es decir, quienes evalúan la capacidad crediticia de empresas y países, los cuales, poco a poco, han comenzado a incluir los temas relacionados con el ambiente en su proceso de calificación. El lento progreso en estos temas, sin embargo, ha brindado una oportunidad a quienes ya habían experimentado con distintas formas de valorar la ecología y auxiliar a sus colegas de la comunidad financiera que pudieran llegar a necesitar dicha información.

*Consideramos que las empresas eco-eficientes tienen la posibilidad de comunicar sus progresos a los mercados a través de la calificación de riesgo. Creemos probable que las empresas calificadoras tradicionales hagan esfuerzos cada vez mayores para reflejar el riesgo ambiental en sus estudios. Les proponemos abocarse, asimismo, a la identificación de oportunidades.*

Nuestra sociedad y sus mercados financieros se encuentran atrapados entre las tendencias individuales a corto plazo y la necesidad de la civilización de asegurar su continuidad a largo plazo. Es preciso que la sociedad se vuelque hacia una visión a más largo plazo y se aboque a la creación de los marcos de referencia necesarios para recompensar a aquellas empresas que logren sumar

más valor, consumiendo menos recursos y generando menor contaminación. Sólo entonces la sociedad podrá esperar que los mercados financieros apoyen un desarrollo sostenible.

## 2. Capítulo 1

### ***La Comunidad Financiera y el Desarrollo Sostenible***

#### **Capítulo 1. La eco-eficiencia y los mercados financieros**

**Stephan Schmidheiny - Federico J. L. Zorraquín**

*¿Sucederá dentro de poco tiempo que los mercados financieros recompensarán en forma sistemática a aquellas empresas que demuestren ser ambientalmente exitosas y penalizarán a quienes agreden al ambiente? Personalidades importantes del mundo de los negocios así lo creen.*

Institutional Investor

Marzo de 1995

Este libro plantea una pregunta candente que casi nadie parecería formularse. ¿Constituyen los mercados financieros del mundo –acciones, bonos, deuda e instrumentos monetarios y quienes trabajan en y con ellos– una fuerza positiva que impulsa el progreso humano sostenible, o representa, en cambio, un impedimento para el logro de este objetivo?

Dicho de otra manera, ¿los mercados financieros estimulan únicamente una mentalidad de rentabilidad a corto plazo, ignorando por completo la realidad ambiental y humana de nuestro tiempo? ¿O, por el contrario, constituyen simples herramientas que reflejan las preocupaciones del hombre moderno y, en calidad de tales, irán tomando en cuenta problemáticas como la pobreza y la depredación de la naturaleza, recompensando empresas y proyectos que incrementen la igualdad de oportunidades y el manejo racional de los recursos naturales?

Éstas son cuestiones cruciales. Hacia fines de 1994, el valor de la suma de acciones que se manejaban en el mercado bursátil mundial totalizaron más de U\$S 15 trillones (U\$S 15.000 billones), es decir, el equivalente a más de 2,5 veces el producto bruto interno (PBI) de los Estados Unidos. El mercado mundial de los bonos, a fines de 1993, operaba una cifra superior a los U\$S 16 trillones en documentos de deuda pública. El hecho de no saber si estas enormes sumas son aplicadas a favor o en contra de un progreso sostenible resulta bastante preocupante.

Hay varias razones, estrechamente interrelacionadas, que indican que preguntas como éstas exigen una pronta respuesta.

En primer lugar, la población mundial está creciendo a un paso acelerado y es probable que se duplique a más de 11 mil millones de personas en algún momento del siglo próximo, a no ser que se tomen medidas serias para desacelerar este incremento. Además, se estima que, en la actualidad, habitan nuestro planeta unos mil millones de personas que viven en situación de extrema pobreza. El concepto de progreso humano sostenible se encuentra resumido en el ideal del “desarrollo sostenible”, cuya mejor definición sería la que señala un tipo de progreso o desarrollo que “satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

Desde luego, el “no-crecimiento” económico no es una opción aceptable si lo que se desea es satisfacer las necesidades de los pobres del presente o de la creciente población mundial del futuro. La Comisión Mundial para el Ambiente y el Desarrollo (World Commission on Environment and

Development – WCED) afirma que el desarrollo sostenible implica límites, “no límites absolutos, sino limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología y de la organización social”. El crecimiento, por lo tanto, tendrá que ser sumamente “eco-eficiente”, un término acuñado por el BCSD para describir el proceso de agregar cada vez más valor y, al mismo tiempo, disminuir en forma permanente la utilización de los recursos naturales, la cantidad de desechos y la contaminación ambiental.

En segundo lugar, se están llevando a cabo importantes inversiones –que contribuirán a la sostenibilidad del crecimiento económico actual– en energía, transportes, agricultura, agua y sistemas cloacales. Asia (con exclusión de Japón) –quizá la región en “desarrollo” de más acelerado crecimiento del mundo– tendrá que invertir en infraestructura alrededor de U\$S 1 billón, entre los años 1994 y 2004. De este total, alrededor del 70% está relacionado con energía y transportes, de acuerdo con una estimación realizada por Standar & Poor’s. Gran parte de este capital tendrá que provenir de los mercados financieros, es decir, de los mercados de acciones y bonos, y de los bancos. Pero cabe preguntarse si esas inversiones reflejarán las realidades ambientales. Tomemos, como un ejemplo entre muchos, el caso del carbón. Tradicionalmente, el carbón ha sido la fuente generadora de electricidad de costo más bajo, pero su combustión provoca la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Sin embargo, en Asia, gran parte de las plantas de energía que en la actualidad se proyectan y financian, serán alimentadas a carbón, en un momento en que los gobiernos del mundo han coincidido en mantener, para el año 2000, la emisión de CO<sub>2</sub> en los niveles de 1990.

En tercer lugar, el desarrollo sostenible significa legar a las generaciones futuras cierto stock de reserva de capital ambiental: una capa de humus productiva, aire puro, climas previsibles, una capa de ozono intacta, bosques fértiles, abundante reserva ictícola y una amplia diversidad genética, tanto de plantas como de animales. Los científicos advierten que todos estos recursos se encuentran amenazados por prácticas actuales de diversa índole. Para citar –una vez más– sólo un ejemplo, es de señalar que las tasas de extinción de especies animales y vegetales han aumentado a lo largo del último siglo entre 100 y 1000 veces su tasa “natural” o “básica”. Estas tasas de extinción, causadas por el hombre, se irán acelerando aun sin el calentamiento de la tierra, es decir, el denominado “efecto invernadero”. ¿Qué puede hacer la comunidad financiera –en caso de poder hacer algo– para revertir este tipo de tendencias?

En cuarto lugar, más de 3 mil millones de habitantes de Europa oriental, Asia y América Latina están cambiando sus economías, de un estilo planificado en forma más o menos centralizada a economías de mercado. Si el crecimiento económico sigue observando los ritmos y esquemas pronosticados por el Banco Mundial para la próxima década, la participación de lo que actualmente es el “mundo rico” en la producción mundial se reducirá, para el año 2020, del 55% actual a un 40%, medido en términos de paridad de poder adquisitivo. Para entonces, China, India, Indonesia, Brasil y México se encontrarán entre las 15 economías más grandes del mundo. Todos éstos son países con una alta tasa de crecimiento demográfico y en todos ellos los recursos naturales se encuentran, ya en la actualidad bajo mucha presión. En una advertencia que se podría aplicar a muchos otros países de crecimiento acelerado, en 1994 el Banco Mundial informó, con respecto a Indonesia, que la creciente contaminación y congestión de sus principales centros urbanos podría hacer que a ese país “le resulte cada vez más difícil competir para atraer inversiones extranjeras, sobre todo en las industrias de alta tecnología necesarias para incrementar la productividad de la fuerza laboral”. ¿Qué pueden hacer estos países para lograr que los mercados financieros apoyen proyectos que favorezcan un progreso sostenible a largo plazo, en lugar de aquellos que aplican un enfoque de “hacerse rico rápido”?

En quinto lugar, el “socialismo” parece estar muerto. El “mercado” ha ocupado su lugar como determinante de la dirección de las inversiones. Los mercados se están desregulando y globalizando, lo cual limita seriamente la capacidad de los gobiernos nacionales de controlarlos. Además, los bienes y servicios públicos, en otro tiempo a cargo del estado, se van privatizando rápidamente. La inversión privada ha pasado a ocupar el lugar de la “ayuda externa” como principal movilizador de capitales hacia el mundo en vías de desarrollo. Pasemos a analizar algunas cifras. El flujo de capital privado hacia los países en desarrollo se ha cuadruplicado entre 1986 y 1994, momento en el cual llegó a más de U\$S 170 mil millones por año, según datos del Banco Mundial. Esta cifra incluye ítems tales como inversiones extranjeras directas (en forma de inversiones realizadas por empresas extranjeras en *joint ventures*), deuda privada (como los préstamos de bancos comerciales o ingresos a partir de la venta de bonos a nivel internacional), e inversiones en valores bursátiles (como la compra de acciones por parte de fondos mutuales o de pensiones). La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) estimó el flujo de la asistencia oficial para el desarrollo (ODA) a través de miembros de sus Comités de Asistencia para el Desarrollo (integrados por la mayoría de los países que brindan ayuda a otros países) en U\$S 57,3 mil millones. Por cuarto año consecutivo, en términos reales, los flujos privados aumentaron y los estatales descendieron, estimándose que estas tendencias se mantendrán. En 1995, un grupo internacional de ayuda para el desarrollo informó que, en ese año, la ODA representó una proporción menor del PBN de las naciones ricas que en cualquier otro momento anterior de los últimos veinte años. Si el gobierno de los Estados Unidos acata la propuesta de sus legisladores en cuanto a recortar el presupuesto de ayuda exterior, este descenso se aceleraría en forma marcada. En vista de que otros países, como Canadá, amenazan con seguir el ejemplo estadounidense, la “ayuda exterior” estatal, tal como ha sido practicada desde siempre, prácticamente podría llegar a desaparecer.

Los gobiernos, tanto donantes como receptores, nunca han logrado que esos flujos de ayuda fueran ambientalmente “sanos”. Pero en estas transferencias intergubernamentales quedaba claro al menos que la responsabilidad, en ese aspecto, estaba en manos de los gobiernos. Frente a la nueva realidad, ¿cómo se podrá asegurar que el flujo de inversiones privadas cumpla con el contenido de calidad ambiental y de sostenibilidad? Se trata de un tema muy importante, ya que, según Brad Gentry, del Centro para Legislación y Política Ambiental de la Universidad de Yale, “estas inversiones privadas a menudo se concretan en proyectos con implicancias ambientales inmediatas, como por ejemplo: privatizaciones de empresas manufactureras del gobierno; concesiones a operadores privados de servicios como electricidad, agua, transportes y otros aspectos de la infraestructura del país; *joint ventures* para la operación de plantas manufactureras existentes o para la construcción de nuevas; y asimismo proyectos relacionados con la producción de energía y la utilización de recursos naturales”. Así, si el mercado asume el rol de coordinador del progreso humano que otrora desempeñaban los gobiernos, es crucial y absolutamente necesario que esta operatoria asegure la sostenibilidad.

Hay voces que también afirman que el poder cada vez mayor de los mercados financieros amenaza, en forma muy concreta, al poder de los gobiernos nacionales. En un artículo firmado por el periodista británico Hamish McRae se ha dicho lo siguiente:

*El aumento de poder de los mercados financieros, junto con su carácter cada vez más internacional, ha traído como consecuencia la reducción del poder individual de los gobiernos nacionales. Ellos deben enmarcar sus políticas económicas teniendo en cuenta como serán recibidas por la comunidad financiera mundial. Si no lo hacen, serán castigados ya sea con una corrida monetaria o con altas tasas de interés, o ambas cosas a la vez.*

## SIETE PREMISAS CLAVE

Seguramente, para algunos lectores la preocupación sobre la manera en que la comunidad financiera puede apoyar el desarrollo sostenible debe resultarles algo tan ajeno y distante como preocuparse por la manera en que los resultados del mercado accionario pueden ayudarlos a determinar el ganador de una carrera de caballos. Sin embargo, como aclararemos en la Parte II de este libro, se trata de una preocupación que ya está instalada y en marcha en todos los sectores de dicha comunidad. Nuestro propósito es, básicamente, informar acerca de los esfuerzos que realizan en la actualidad los protagonistas de ese mercado.

Pero antes de ocuparnos de ello, queremos hacer algunas reflexiones sobre lo difícil que puede resultar una tarea de esa naturaleza. Hay siete premisas que nos ayudaron a reflexionar sobre las preguntas planteadas en la sección anterior. No las presentamos como verdades y ni siquiera como profundas convicciones, sino como hipótesis que han surgido a lo largo de nuestras discusiones con especialistas y expertos, durante las investigaciones relacionadas con la elaboración de este libro. En conjunto, resultan preocupantes y sugieren una gran cantidad de cambios que serán necesarios antes de que los mercados financieros fomenten el desarrollo sostenible en lugar de desalentarlo.

- El desarrollo sostenible exige inversiones con plazos de recuperación prolongados. Por el contrario, los mercados financieros buscan plazos de recuperación cortos.
- Los esfuerzos de una empresa tendientes a su eco-eficiencia, a menudo reducen las ganancias presentes a favor de potenciales beneficios futuros. Los mercados financieros prefieren las empresas que ostentan altas ganancias en el presente frente a aquellas con potencial futuro.
- En razón de los bajos precios de los recursos naturales y de la habilidad de las empresas para mantener fuera de sus estados contables los costos de la mayor parte de los daños ambientales que causan sus operaciones, el volverse eco-eficientes no les traería ningún beneficio. Además, muchas veces las empresas eco-eficientes no son las preferidas por los mercados financieros.
- En los países en vías de desarrollo, el desarrollo sostenible exige inversiones masivas. Asimismo, los operadores financieros desalientan, a través de primas de riesgo, las inversiones en ese tipo de países.
- Los altos impuestos al trabajo hacen necesario mejorar ostensiblemente la productividad laboral, con lo cual incrementan el desempleo mientras que, al mismo tiempo, los bajos costos de los recursos desalientan una utilización eficiente de ellos.
- Los sistemas contables y de información no reflejan con acierto los potenciales riesgos y oportunidades ambientales. Los mercados financieros se ven obligados a tomar decisiones en base a información inconsistente y deformada.
- El desarrollo sostenible se preocupa por la importancia que tiene el futuro. En cambio los mercados financieros descuentan el futuro rutinaria y automáticamente.

Nos ocuparemos de estas premisas en diversos momentos de los capítulos siguientes y volveremos a ellas, de manera específica, en la Parte III.

Ningún estudio sobre la relación entre mercados y sostenibilidad sería completo sin hacer referencia a algunos trabajos académicos que sugieren que los mercados, casi siempre, trabajan en contra de la sostenibilidad. En 1976 se publicó el libro de Colin Clark *Mathematical Bioeconomics: The Optimal Management of Renewable Resources*, uno de los volúmenes que integraban una serie de publicaciones sobre matemática pura y aplicada. En esa obra, Clark se muestra especialmente preocupado por el concepto de la “cosecha máxima sostenible” (*maximum sustainable yield: MSY*), es decir, la cantidad máxima de árboles, peces, nueces o cualquier otro recurso renovable que puede ser cosechada por año. Si se cosecha más allá de ese nivel, el recurso no puede producir un

“excedente” anual. Si, en cambio, se cosecha menos, se está por debajo del máximo obtenible. La MSY es, en esencia, la tasa más alta de “interés” obtenible de un recurso renovable.

Clark tiene mucho que decir con respecto a los límites del enfoque de la MSY; al comienzo de su obra presenta un caso hipotético. Supongamos que hay 75.000 ballenas azules en el océano y que la MSY es de 2.000 ballenas por año. Para simplificar el ejemplo, digamos que una sola empresa del mundo puede cazar esas ballenas y que cada ballena procesada tiene un valor de mercado de U\$S 10.000. Si se lleva a cabo una caza de ballenas sostenible –2.000 ballenas por año–, la empresa generará un ingreso anual de U\$S 20 millones.

Ahora, supongamos que a dicha empresa le fuera posible cazar las 75.000 ballenas existentes en un solo año y obtener una suma total de U\$S 750 millones en ese período. Si esa suma se invirtiera a una modesta tasa de interés del 5% anual, daría un rendimiento de U\$S 35,7 millones por año, es decir, considerablemente más alto que los U\$S 20 millones anuales y, además, sin el trabajo y el costo que implica la caza del cetáceo. A pesar de que éste es un modelo que implica la caza del cetáceo. A pesar de que éste es un modelo simplista, a lo largo de 350 páginas de explicaciones matemáticas sobre las complejidades de la flexibilidad del mercado, las tasas de redescuento y actualización, etcétera, Clark demuestra que los resultados básicos se mantienen para la mayoría de los recursos renovables.

Básicamente, la rentabilidad de “cosechar” un recurso renovable pocas veces invita a una explotación sostenible sino que, por el contrario, estimula lo opuesto, aun en aquellos casos en los que hay un único propietario y no una competencia mal controlada, como sucede en la mayoría de las operaciones pesqueras que se realizan en la actualidad. Para peor, la MSY de especies de larga vida y reproducción lenta, como lo son las ballenas o las maderas duras tropicales, es muy baja, del orden del 2%. Sólo especies de vida corta y reproducción rápida, por ejemplo los camarones, tienen una MSY que casi se puede igualar a las tasas de interés del mercado de capitales. La fluctuación amplia e impredecible de algunos stocks de reservas –es el caso de muchas especies ictícolas– también induce a una explotación inmediata en lugar de hacerlo a largo plazo.

“Este planteo ilustra uno de los aspectos fundamentales de la economía del manejo de los recursos”, escribió Clark. “El dueño de un determinado recurso suele considerarlo como un ‘activo’, y esto vale tanto para los recursos no renovables como para los renovables. Espera que ese bien de capital le produzca dividendos a una tasa de rendimiento ‘normal’; de lo contrario, el dueño intentará desprenderse de ese activo”. Clark agrega que este resultado puede ser considerado como el “primer teorema fundamental de la economía de los recursos”, y ya fue desarrollado en 1931.

Hoy en día, este síndrome se puede ver con toda claridad en las actividades de muchas empresas forestales internacionales, que compran a los gobiernos los derechos para talar bosques naturales a precios muy por debajo de cualquier tasa razonable del mercado. Un estudio de este fenómeno determinó que, a pesar de que las obligaciones de reforestar representaban un pasivo, éste rara vez aparecía en los balances y, de hecho, a menudo eran ignoradas. En vista de los beneficios extraordinarios obtenidos y de las pocas obligaciones presentadas, sus acciones tuvieron una evolución extremadamente buena durante los últimos años. No se sabe si los accionistas se dan cuenta de la naturaleza insostenible de las actividades de esas empresas –tanto desde el punto de vista de la rentabilidad como desde el aspecto ambiental– y si venderán sus valores antes de que estos beneficios extraordinarios se terminen. Lo que sí es claro es que la globalización de los flujos de inversión está acelerando la destrucción de los bosques naturales.

## EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS Y EL AMBIENTE

Sin embargo, quizás el panorama no sea tan negro como lo hemos pintado. A pesar de que la relación entre los mercados financieros y el desarrollo sostenible sólo ahora está dando sus primeros pasos, no cabe duda de que está creciendo. Y, lo que es más importante, una cantidad de líderes empresarios, inversores, analistas, banqueros, aseguradores, contadores y evaluadores han dejado de focalizar su atención sólo en los riesgos, para fijarla en las oportunidades. En cada sector, algunos están haciendo buenos negocios a partir de la búsqueda social por la sostenibilidad. En lo que resta de este capítulo analizaremos de qué manera estos temas de la sostenibilidad han pasado a formar parte de las agendas de las empresas en general y de la comunidad financiera en particular. Para ello, debemos analizar primero cómo ha cambiado, a lo largo de la última década y en forma acelerada, la perspectiva que las empresas tienen del “ambiente”.

Hasta hace relativamente poco, el ambiente era considerado como algo totalmente separado de las actividades humanas, con excepción de aquellas que lo dañaban. Una pequeña minoría –a menudo denominada “ambientalistas”– estaba profundamente preocupada por ese daño; pero, a la gran mayoría, el tema no le interesaba. La preocupación empresaria con respecto al ambiente se manifestaba a través de los esfuerzos de las compañías por cumplir con las regulaciones ambientales y del *lobby* para eludirlas.

Durante la década del ochenta, una creciente evidencia de la contaminación por carbono, destrucción de la capa de ozono, extinción de especies y pérdida de bosques y tierras fértiles sugería que el daño era más global y más serio de lo que se había estimado. También resultó claro que el ambiente no era un lugar fuera de la esfera humana sino una serie de procesos afectados por todas las actividades realizadas por el hombre: la producción, el consumo, la agricultura, la pesca, la minería, etcétera. Así, la vieja controversia entre quienes defendían el ambiente natural y quienes abogaban por el “desarrollo” comenzó a perder fuerza a medida que los dos objetivos se iban viendo cada vez más como las dos caras de una misma moneda. Era cada vez más difícil preocuparse por el ambiente natural sin hacerlo también por las necesidades y aspiraciones de la gente. También resultaba cada vez más complejo preocuparse por la gente y no hacerlo también por el impacto del hombre sobre su entorno natural.

Lo que mejor resume esta nueva visión es el concepto del desarrollo sostenible. Desde que apareció la forma moderna del concepto (que, en realidad, es una idea tan vieja como las primeras sociedades primitivas de cazadores y recolectores), a mediados de la década del ochenta, se han escrito muchos libros sobre el desarrollo sostenible y establecido muchas organizaciones relacionadas con el tema. Existe un amplio consenso de que el cuidado del ambiente no es un objetivo limitado a los países “en vías de desarrollo”. Todas las naciones se están desarrollando, en el sentido del término definido como “evolucionando en posibilidades”, y en muchos países industriales sus posibilidades “evolucionan” de tal modo, que el planeta se está volviendo cada vez menos sostenible, tanto por los modelos de consumo existentes como por la generación de sustancias contaminantes.

Sin embargo, el concepto sigue mal definido. Es mucho más obvio en sus aspectos negativos que en los positivos. Las actuales tasas de crecimiento demográfico parecen insostenibles, pero resulta menos claro cuál sería una población humana sostenible. Se dice que se está quemando más carbón, petróleo y gas de lo que la estabilidad climática tolera, pero no está claro cuál sería, exactamente, un camino hacia una energía sostenible.

Con todo, por impreciso que sea, el concepto tiene mucha fuerza. La gente siente de modo instintivo que la primera obligación de los padres es velar por sus hijos. El desarrollo “insostenible” es exactamente lo opuesto; significa que la generación presente está quitando los recursos a las generaciones futuras. Estamos robando a nuestros hijos.

La idea del desarrollo sostenible ha sido una fuerza motora eficaz para incorporar nuevos grupos en los debates sobre el progreso y el ambiente. Un número cada vez mayor de economistas está ocupado en buscar una definición de la sostenibilidad, en términos económicos. Los juristas trabajan en las bases legales sobre las cuales establecer un equilibrio entre esta generación y las que vendrán. Algunos políticos se interesan en encontrar la forma de proyectar su actividad más allá de las próximas elecciones para que se ocupe de las necesidades de nuestros descendientes. El mundo de los negocios ha evidenciado excesiva lentitud en ocuparse del desarrollo sostenible, en parte debido a la forma tradicional de organizar los problemas del ambiente y, en parte, a causa de una clara incapacidad para detectar la relación entre los negocios y las necesidades “fuera de los mercados” del hombre de hoy y de ese hombre del mañana que no participa en los mercados de hoy.

Pero se advierte que las empresas han empezado a interesarse por estos temas. La revista *Tomorrow* publicó recientemente una lista de 40 organizaciones que nuclean a las empresas con fines ambientales y relacionados con el desarrollo sostenible. Incluso ha inventado una sigla para esas entidades: GBN (Green Business Network). El mundo de los negocios también está participando de muchas organizaciones que agrupan a líderes empresarios, de la política, de la ciencia y de otras entidades no-empresarias; como ejemplo, podemos citar, en los Estados Unidos, el Consejo Presidencial para el Desarrollo Sostenible, y en Canadá, las Mesas Redondas sobre el Ambiente y la Economía.

En el ámbito empresarial se han hecho importantes progresos en los intentos por resolver estos problemas; retrospectivamente, puede ser visto como una cronología previsible. En primer término lo hicieron las empresas más modernas y progresistas, en sectores cuyas preocupaciones respecto del desarrollo y el ambiente eran más evidentes: las compañías químicas y generadoras de energía multinacionales y las grandes firmas manufactureras. Les siguieron los minoristas, en gran parte como respuesta al “consumismo verde”. Más tarde, las grandes empresas de servicios se dieron cuenta de que tampoco ellas podían ser indiferentes al tema, en razón de su empleo de energía, papel y transportes.

En el mundo financiero, existen desde hace mucho tiempo los servicios de “inversiones verdes”, que ofrecen acciones de empresas que no están señaladas como causantes de contaminación excesiva o por mal uso de los recursos ambientales. Pero la principal preocupación de este sector en cuanto al tema ambiental se manifestó en las empresas de seguros, afectadas por los costos de limpieza de áreas industriales contaminadas y los gastos generados por daños causados por lo que parecería ser un alarmante incremento de desastres naturales relacionados con los cambios climáticos (ver Capítulo 6).

La mayoría de los bancos se ha resistido a involucrarse en el tema, argumentando que ellos casi no utilizan recursos naturales y provocan muy poca contaminación. Cuando, en 1990, el BCSD comenzó a reclutar miembros, no pudo encontrar en el mundo empresario un solo banquero dispuesto a asociarse. (En 1995, el BCSD se fusionó con el Consejo Industrial Mundial para el Ambiente (World Industry Council for the Environment: WICE) quedando constituido el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, el WBCSD).

Desde entonces, sin embargo, una serie de casos presentados ante la justicia, especialmente en los Estados Unidos, despertó la conciencia de que los bancos pueden llegar a ser considerados responsables del daño ambiental en áreas industriales, concretamente los causados por empresas en las cuales los entes financieros tienen un cierto grado de participación propietaria o ejercen funciones de administración (ver Capítulo 5). Estas resoluciones causaron un profundo impacto en la manera de pensar de la comunidad bancaria internacional. A la fecha de iniciación de la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (ECO' 92), en junio de 1992, los banqueros emitieron –y muchos la firmaron– una “Declaración de los Bancos sobre el Ambiente y el Desarrollo Sostenible” (ver Apéndice).

Así como las diversas compañías y los diferentes sectores empresarios se fueron involucrando en temas ambientales, en momentos diferentes y de acuerdo con sus circunstancias, también dentro de cada empresa las diversas áreas se fueron haciendo cargo del tema. La mayor parte de las compañías trató, en un primer momento, de delimitar el problema ambiental en una “oficina ambiental” especial. Pero pronto resultó evidente que esto era algo tan impracticable como crear, a nivel país, un Ministerio del Ambiente débil y luego responsabilizarlo por los daños causados por los ministerios más poderosos, por ejemplo el de transportes, el de industria y minería o el de agricultura. Es así como, en empresas progresistas, el ejecutivo máximo de la compañía (CEO) es también, en la práctica, el responsable máximo por temas relacionados con el cuidado del ambiente. La tarea siguiente consistió en difundir las nuevas preocupaciones ambientales del CEO a través de todas las empresas. Mucho se ha escrito sobre este proceso en las diferencias compañías. Pero resulta curioso descubrir que, aparentemente, es más fácil inculcar una conciencia ambiental en los niveles bajos y medios de una empresa que en sus directivos financieros. La empresa manufacturera 3M, de los Estados Unidos, se ha hecho célebre por haber obtenido de su personal, a lo largo de los últimos 20 años, más de 3.000 proyectos para la prevención de la contaminación, los cuales han ahorrado a la empresa más de U\$S 500 millones. No es difícil entender por qué los trabajadores les llevan ventaja, en este aspecto, a los ejecutivos financieros. La mayoría de los operarios tiene un contacto cotidiano con los desechos y la contaminación de los recursos generados por la empresa. Cuando se les pide que trabajen sobre estos problemas –y se les ofrece una recompensa adecuada por hacerlo– están en la mejor de las posiciones para ofrecer ideas prácticas, útiles y concretas.

Sólo mucho más tarde los directivos financieros de las empresas comenzaron a interesarse por los temas relacionados con el desarrollo sostenible. Lo que sucede es que, tradicionalmente, estos funcionarios se hallan alejados de toda preocupación ambiental que no se refleje en el balance de la empresa. Un informe del One Hundred Group of Financial Directors (los ejecutivos financieros de las 100 principales empresas británicas) alegó que esto se debe, en gran medida, a las dificultades para cuantificar y medir los costos de estos riesgos, y los costos y beneficios que representa evitarlos. Pero el informe advirtió también que las empresas que se muestran negligentes en este aspecto pueden causar considerables pérdidas a sus inversores y banqueros. En gran parte, es por estas mismas razones que la preocupación por el desarrollo sostenible se ha infiltrado tan lentamente en los mercados financieros. La postura general es que “si no lo podemos medir, no nos hablen del asunto”.

Basta con tomar cualquier texto que hable de mercados financieros y actividades bancarias y mirar el índice: difícilmente se encontrará una mención como “ambiente” o “responsabilidades ambientales”. (Esto también valía para la mayoría de los textos empresarios publicados antes de 1990; en la actualidad, la mayoría de ellos registra una larga lista de temas con el título “Ambiente”.) Mientras realizábamos las investigaciones para este libro, hablamos con muchos integrantes de empresas del mercado financiero para preguntarles, básicamente, cuál era su posición (o la de sus empresas) con respecto a los temas relacionados con el ambiente y el desarrollo sostenible. Por lo general, la primera reacción era de sorpresa, reacción que daba paso, de inmediato, a algo muy cercano a temor: temor a que la comunidad financiera se viera involucrada en las mismas engorrosas discusiones y publicidad que habían afectado a otros sectores empresarios. Pero la cuestión no es sólo que los bancos inversores, los agentes de bolsa y la mayoría de las demás instituciones del mercado financiero no generan residuos tóxicos, sino que tampoco inician juicios de “compensación” a aquellas empresas que provocan problemas ambientales asumiendo

los correspondientes costos financieros. Los riesgos ambientales son muy difíciles de cuantificar en este tipo de empresas y sólo ahora empieza a resultar evidente por qué la banca comercial y los agentes de bolsa deberían molestarse en analizar esas cifras en las empresas en las que piensan invertir.

“¡No somos ‘devoradores’ de recursos naturales como puede serlo una empresa química o papelera!”, se defendió el vocero de una compañía de inversiones internacional cuando se le preguntó si la firma tenía algún tipo de política ambiental. “Pero estoy de acuerdo en que, si tenemos políticas para la mayoría de los temas importantes, también deberíamos tener una política ambiental”, agregó. Por el contrario, Salomon Brothers, el banco inversor, tiene programas muy desarrollados relacionados con reciclaje, reducción de desechos, eficiencia energética, educación ambiental y gerenciamiento del riesgo financiero ambiental.

Pero las respuestas de la mayoría de los integrantes de este sector del mercado a la pregunta acerca de la relación entre el desarrollo sostenible y la comunidad financiera pueden sintetizarse en otra pregunta: “¿Por qué habríamos de preocuparnos por eso?”. Uno de los objetivos de este libro es dar algunas respuestas prácticas y concretas a este último interrogante.

Una de ellas –muy lejos de ser la más importante– es que los grupos ambientalistas tratan de alcanzar sus objetivos ejerciendo presión sobre la comunidad financiera.

Algunos grupos han protestado contra ofertas públicas de acciones en la bolsa de valores. En 1993, un consorcio formado por grupos ambientales de presión procuró convencer a los administradores de fondos de que no invirtieran en una licitación de acciones de Barito Pacific, una empresa forestal de Indonesia (ver Capítulo 4). Después de su reunión anual de 1994, Greenpeace Internacional anunció que haría mayores esfuerzos para influir sobre el flujo de dinero público y privado hacia emprendimientos que afectaran al ambiente. La organización no aclaró cómo pensaba llevar adelante esta acción, pero a principios de ese año comenzó a emitir comunicados de prensa y a escribir cartas a compañías de inversiones cada vez que observaba algún movimiento en el mercado que consideraba perjudicial a los fines mencionados.

En octubre de 1994, por ejemplo, Greenpeace previno a los administradores europeos de fondos que se opondría al lanzamiento de acciones de una empresa de fabricación de cloruro de polivinilo, la European Vinyls Corporation (EVC), en la bolsa de Amsterdam. El grupo, que había hecho campañas en contra del uso de cloruros, afirmó que “las consideraciones ambientales son fundamentales en lo que se refiere a las posibilidades del mercado y a la rentabilidad de EVC”, y que “ignorarlas resultaría desastroso para los inversores y para la misma empresa”. Esto demuestra que, cuando Greenpeace se involucra en los mercados económicos, muy sabiamente enfatiza el perjuicio financiero y no el daño ambiental. El grupo también ha organizado diversas reuniones con aseguradores, banqueros y otros agentes del mundo de las finanzas, sobre todo para alentarlos sobre inversiones que podrían acelerar los cambios climáticos.

“Y, por supuesto, también seguimos manteniendo nuestras tácticas de enfrentamiento directo”, dice un representante de Greenpeace. Los bancos comerciales, cuyo negocio depende del público masivo, se verían sumamente perjudicados por este tipo de publicidad negativa”. (En este libro citamos reiteradas veces a Greenpeace, no porque coincidamos siempre en este grupo, sino porque ha sido, sin duda, la organización ambiental más sofisticada en su intento por hacer conocer sus preocupaciones a la comunidad financiera).

Cuando Michael Heseltine fue presidente del Departamento de Comercio de Gran Bretaña, le dijo a la comunidad financiera británica, en una disertación realizada en el año 1992: “Tarde o temprano, hasta los ambientalistas más ingenuos comprenderán en qué medida las empresas –que son sus

blancos más habituales— operan dentro de un contexto limitado a accionistas, prestadores y aseguradores. En ese momento, el inquisitivo ‘dedo verde’ (‘searchlight’) señalará directamente en la dirección en la que ustedes ignoren sus responsabilidades ambientalistas”.

Así, por razones diversas, la banca comercial e inversora, los aseguradores y otros integrantes de la comunidad financiera que, aparentemente, se encuentran muy alejados del frente ambiental se están viendo involucrados en estas acciones. Pero ¿cómo puede una compañía dedicarse a promover el desarrollo sostenible sin dejar de desempeñar su papel en el mundo empresario?

## **ECO-EFICIENCIA VERSUS SOSTENIBILIDAD**

El empresariado tiene sólo una franja, relativamente estrecha, dentro de la cual puede modificar sus actividades que gravitan sobre el ambiente. Basta con que haga demasiado poco, y la empresa ya no estaría cumpliendo con las disposiciones legales. En cambio, si hace mucho podría estar gastando su dinero en forma tal que su competitividad se vería comprometida. Muchas empresas, impulsadas más por sus principios y valores que por estrictas consideraciones de rentabilidad, seguirán gastando dinero “más allá de sus obligaciones”. Pero hay límites muy acotados para este tipo de compañías, ya que una empresa que no gana dinero pronto deja de existir.

Así, el mayor impulso para avanzar hacia un desarrollo sostenible tiene que provenir del voto del gran público, de los gobiernos que ese público elige, de los consumidores, de los padres y grupos de ciudadanos. Todos ellos deberán cooperar para construir un nuevo marco social, dentro del cual las empresas desarrollarán su actividad.

Cuando se formó el BCSD para presentar, en ECO’ 92, una “perspectiva empresaria” del tema ambiental, se encontró con el problema de decir algo que tuviera sentido en lo relacionado con el ambiente y el desarrollo, pero que también tomara en cuenta las realidades básicas del mercado. Por eso, los 50 miembros originales, todos CEOs o su equivalente, dedicaron gran parte de su informe para la conferencia de Río a asesorar a los gobiernos acerca de cuáles eran las políticas y las reglas de juego que exigían ser cambiadas.

El BCSD también realizó un concurso para la creación de un término que resumiera en forma precisa la idea del desarrollo sostenible a nivel empresario.

El término ganador fue “eco-eficiencia”, que expresa tanto una eficiencia económica como ambiental. De acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Desarrollo y el Ambiente, el desarrollo sostenible “no es un estado de armonía estático, sino un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios institucionales se llevan a cabo en forma tal que resulten compatible con las necesidades presente y futuras”. Prácticamente lo mismo se puede decir de la eco-eficiencia: no es un estado de armonía estático, sino un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y de los cambios empresarios maximizan el valor agregado y minimizan el consumo de recursos, los desechos y la contaminación.

Pero no hay que confundir la eco-eficiencia con el desarrollo sostenible, que es un objetivo para el conjunto de nuestra sociedad. A pesar de que también puede necesitar en algún momento del aliento de la sociedad a través de la fijación de marcos de referencia, la eco-eficiencia es una tarea a cumplir por cada una de las entidades que actúan dentro de esa sociedad. Incluso es posible imaginar un mundo en el cual cada empresa se tornara más y más eco-eficiente y, sin embargo, se estuvieran deteriorando los recursos del planeta debido al crecimiento demográfico y el incremento en el número de empresas e industrias.

Prácticamente todas las empresas causan contaminación, aunque más no sea a través del consumo de energía. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) propuso una definición estricta de “empresa sostenible”: es aquella que “al final de cada período contable no deja el ambiente en condiciones peores de cómo estaba en su comienzo”. Y luego ofrece la conclusión lógica: “Resulta perfectamente claro que muy pocas empresas (o casi ninguna) se acercan a algo que pueda ser definido ni remotamente como sostenibilidad, sobre todo en los países desarrollados”.

A continuación, pasó a señalar una cantidad de empresas multinacionales que habían logrado cierta conciliación con esta realidad. The Body Shop, una empresa de cosméticos que utiliza su imagen “verde” como ventaja competitiva, expresa: “No aceptamos la idea de que cualquier empresa puede lograr una ‘relación amigable’ sincera con el ambiente. Esto es algo directamente imposible. Cualquier iniciativa empresaria implica un cierto grado de daño ambiental. Lo más que podemos hacer es limpiar lo que ensuciamos y buscar, en forma permanente, la manera de reducir nuestro impacto sobre el ambiente”.

En 1994, la UNCTAD realizó una encuesta entre empresas multinacionales a fin de determinar sus puntos de vista sobre el desarrollo sostenible; los resultados de la misma se basaron en las respuestas de 73 empresas de 14 países, la mayoría de ellas europeas, pero con inclusión también de Sudáfrica, Corea del Sur, Hong Kong y Japón. Los cuestionarios fueron completados por los ejecutivos más conocedores de los temas ambientales, es decir, por lo general, los directivos a cargo del tema ambiental. Los resultados de la consulta fueron sumamente contradictorios. El 82% de los encuestados respondió que sus empresas reconocían formalmente la necesidad de la sostenibilidad; sin embargo, la mayoría de esos “reconocimientos formales” no definían qué era la sostenibilidad; el 96% consideraba que era necesario un enfoque compartido entre gobiernos, empresas y sociedad; el 86% pensaba que implicaba resolver tanto los problemas ambientales como los sociales; y el 82% consideró que el desarrollo sostenible era compatible con la ética de la rentabilidad. Sin embargo, el 59% de los encuestados estaba convencido de que la sostenibilidad no implicaba tomar en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. El 45% dijo que era sinónimo de sistemas de gestión ambiental; y el 37% sentía que sus empresas ya habían logrado la sostenibilidad.

Entonces, de acuerdo con esta información, se puede resumir la situación diciendo que, a pesar de que la mayoría de las empresas afirma formalmente que la sostenibilidad es “algo bueno”, existe cierta confusión acerca de lo que este concepto realmente implica.

“Más de 70 % de los encuestados fueron influidos, entre otros, por la Cámara Internacional de Comercio (ICC), por la Agenda 21 (el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Ambiente de 1992), por ECO’ 92 (la reunión mundial sobre el ambiente que tuvo lugar en Río de Janeiro ese mismo año), por revistas económicas, por los medios de información, por el informe Brundtland (WCED), por sus gobiernos nacionales y por sus cámaras profesionales y empresarias”, informó la UNCTAD. “De todas estas fuentes, sin duda las primeras cuatro fueron las que ejercieron una influencia más poderosa”, mientras que los grupos de presión en el tema ambiental fueron citados como los menos influyentes. También se observa que el hecho de que la carta de la ICC para el Desarrollo Empresarial Sostenible no mencione concretamente la sostenibilidad ni la defina, “explica en cierta medida lo que parecería una comprensión ingenua y limitada de los conceptos por parte de muchas de las empresas que contestaron”.

La encuesta cita, asimismo, en forma anónima, algunos comentarios de los encuestados. Las diferencias entre los distintos puntos de vista son realmente asombrosas; por ejemplo:

*La gente tiene que volver a la vieja religión de ganar dinero y asumir riesgos. Si la industria volviera a asumir riesgos, se produciría el desarrollo sostenible. (Italia)*

*La búsqueda del crecimiento económico, tal como lo exigen las instituciones financieras nacionales e internacionales, es la causa de gran parte de la explotación ambiental y humana. (Reino Unido)*

*Los gobiernos tienen que fijar objetivos claros, coherentes, impositivamente neutrales y con metas con sentido común en relación al desempeño ambiental y, a continuación, dar a las empresas la libertad de innovar y llegar al desempeño al que se aspire. Esto conducirá a la sostenibilidad en un marco temporal de aproximadamente 10 a 30 años... Por fin, habrá una nueva generación de productos que constituirán un futuro sostenible. (Suiza)*

*La sostenibilidad no es rentable. Una buena administración ayuda a mantener la casa limpia y en orden, a economizar dinero, pero la búsqueda de la sostenibilidad está más allá de una buena administración... y puede resultar costosa. (Reino Unido)*

La encuesta sugiere que, a pesar de que la mayoría de las multinacionales afirman públicamente que trabajan con miras a un desarrollo sostenible, son muy pocas las que han decidido de qué manera integrarlo como parte de sus estrategias empresarias. Esto no resulta sorprendente, dado que el desarrollo sostenible exige una preocupación por las próximas generaciones y por requerimientos futuros que no pueden ser satisfechos fácilmente a través de simples transacciones de mercado. Son temas que a las empresas le resultan tan complicados y problemáticos como a las personas. El mundo empresario se une a los científicos, juristas, líderes políticos, filósofos y ambientalistas en la convicción de que “es insostenible ser insostenible”, pero todavía con grandes dificultades para definir qué actividades son “sostenibles”. Por lo tanto, algunos directores de empresas –los que han logrado ubicarse “más allá del cumplimiento”– están trabajando para lograr una “buena administración” o eco-eficiencia, y la llaman “sostenibilidad” porque es el término más usual.

## **MAS ALLÁ DEL AMBIENTE**

Una de las tantas revoluciones que se están produciendo en el mundo de hoy podría ser denominada la “revolución de la participación”. El aspecto de las comunicaciones, que constituye una parte fundamental de la revolución tecnológica, permite a la gente saber de inmediato qué sucede en los rincones más apartados del globo. Así, los niños de Nueva York se enteran –y, en cierta medida, se preocupan– de lo que sucede en los bosques tropicales del Brasil. Este conocimiento y esta preocupación provocan en la gente el deseo de participar, de manera más o menos comprometida. El movimiento del “consumo verde” es sólo uno de los ejemplos que existen en este sentido.

Mucha gente quiere participar en lo que hacen las empresas de una nueva manera, como, por ejemplo, influyendo sobre lo que producen, cómo lo producen y cómo tratan a sus empleados y a sus vecinos. Esta participación puede ser local o global, y las empresas pueden llegar a convertirse en blanco de críticas, sin corresponderle responsabilidad alguna. Cuando Francia anunció, en 1995, su intención de reanudar los ensayos de armas nucleares en el Pacífico Sur, los movimientos de protesta en América del Norte, Europa y Australasia organizaron un boicot contra los productos franceses. Una encuesta reciente comprobó que el 75% de los hogares de los Estados Unidos estaban boicoteando ciertos productos de consumo masivo; más de la mitad de esos consumidores adoptaron esta actitud a causa de su disconformidad con ciertas políticas de las empresas que los producían.

En junio de 1995, la firma Shell UK, del Reino Unido, se dispuso a deshacerse de una gran boya petrolera de almacenaje hundiéndola en las profundidades del océano. Para llevar a cabo la medida

tenía el respaldo del gobierno británico y de muchos científicos que afirmaban –después de cuidadosas consideraciones sobre aspectos ambientales, económicos y de seguridad, y luego de los materiales tóxicos que incluía la operación– que hundirla en aguas profundas era una solución mejor que traer la boya a la costa y desmantelarla. Sin embargo, otros gobiernos europeos se opusieron al proyecto, así como también los grupos ambientalistas y un amplio sector de la opinión pública. La gente, en general, sentía de manera muy marcada que, si a ellos se les exigía reciclar latas y botellas y no arrojar basura a los cursos de agua, no correspondía en modo alguno arrojar una instalación petrolera de semejante magnitud a las profundidades del océano.

Shell UK abandonó su proyecto y, mientras se escriben estas líneas, está estudiando opciones alternativas. El futuro podría llegar a demostrar que, desde el punto de vista práctico y científico, Shell UK estaba en lo cierto al diseñar su plan original. Su error – además de construir un equipo tan grande sin un plan claro y consensuado para su posterior destrucción o su reciclaje– fue no tener bastante en cuenta a la gran masa de público europeo que siente que tiene derecho a opinar sobre las operaciones de la compañía.

En lo que puede conformarse como una nueva tendencia, Shell fue criticada no sólo por los grupos ambientalistas sino también por otras empresas. La firma danesa de biotecnología Novo Nordisk, como firmante de la Carta Empresaria para el Desarrollo Sostenible (en la cual se pedía a sus firmantes tener en cuenta las políticas ambientales de sus proveedores) emitió una declaración en la que decía que, por principio, se oponía a que se arrojaran desechos industriales al mar. Instó a Shell a informar a sus diversos “públicos”, entre ellos a sus asociados en emprendimientos comerciales, sobre la lógica con que había encarado ese proyecto.

John Elkington, autor *The Green Capitalists*, escribió así sobre el caso Shell: “La controversia, que giró más en torno de la percepción que el gran público tenía sobre las prioridades ambientales que del efectivo impacto ambiental, señala el surgimiento de una nueva era, que exige a las empresas focalizar su atención en una triple *bottom line*: economía, ambiente y equidad social”.

Más allá del gerenciamiento ambiental, el desarrollo sostenible tiene injerencia en temas de igualdad de oportunidades, a fin de que la gente, tanto hoy como en el futuro, goce de mayores posibilidades de satisfacer sus necesidades. Quizá parezca fuera de lugar a pedir a las empresas que se preocupen por la igualdad de oportunidades y por las generaciones futuras pero, sin embargo, en cierto sentido ya lo están haciendo. Varias compañías de los Estados Unidos han sido afectadas por informes que denunciaban que sus productos eran manufacturados por niños, en condiciones que los estadounidenses consideran de “explotación”. No cabe duda de que los niños constituyen los representantes vivos y reales de las generaciones futuras.

El trabajo infantil es un tema sumamente complejo, porque, para muchos niños de los países en vías de desarrollo, la opción no es “fabricar camisas o ir a la escuela” sino que, en muchos casos, es probable que sea “fabricar camisas o dedicarse a la prostitución”, o trabajar en una cantera o en una fábrica de alto riesgo. Se ha estimado que entre 1993 y 1994, de 30.000 a 50.000 niños fueron despedidos de las plantas textiles de Bangladesh porque los fabricantes temían perder sus negocios con el “primer mundo”. Muchos de esos niños despedidos se dedicaron a la prostitución o pasaron a realizar trabajos impropios para ellos, por ejemplo, desempeñarse como soldados. No obstante, en el mundo de los negocios, la percepción del público sigue siendo tan importante como la realidad.

La firma Franklin Research and Development, con asiento en Boston, que se ocupa de inversiones éticas, estima que en los Estados Unidos menos del 5% de los minoristas y de los fabricantes de productos de marca se involucra en temas relacionados con los derechos humanos, pero entre este 5% se encuentran algunas de las firmas más grandes y conocidas, como Levi, Wal-Mart, Sears Roebuck, Reebok, The Gap, Nike y Nordstrom. Una empresa sueca de amoblamientos y productos

para el hogar, IKEA, resolvió que todas las alfombras que vende deben llevar un certificado de que han sido producidas sin la utilización de mano de obra infantil. La National Provident Institution, con sede en Gran Bretaña, que ofrece una selección de programas de inversión “éticos”, determinó, en una encuesta realizada en 1995 sobre el consumidor británico, que la preocupación por la esclavitud moderna y la violación de los derechos de los trabajadores había superado al interés que despertaban temas como la conservación del ambiente y del bienestar animal.

De hecho, muchas empresas se encuentran involucradas en lo que se podría denominar el aspecto “social” del desarrollo sostenible, sin darle ese nombre. Por lo general, lo llaman “relaciones con la comunidad” o algo similar. Un estudio realizado hace poco en Gran Bretaña sobre empresas involucradas en tareas de relaciones con la comunidad determinó que, en la década del ochenta, esta tendencia era impulsada sólo por algunos entusiastas presidentes de empresa, tildados de “chiflados” por sus pares. Pero “involucrarse con la comunidad ya no constituye simple filantropía, sino que es algo que puede llegar a brindar beneficios comerciales muy reales y concretos”, afirma el estudio en cuestión. Al respecto, menciona el caso del grupo vidriero Pilkington, que fue pionero en el tema de las relaciones con la comunidad en la región de Gran Bretaña en la que desarrolla sus actividades. Estos antecedentes fueron, según se dijo luego, un factor importante en el éxito que tuvo la empresa al defenderse de una adquisición hostil intentada en 1986-87, adquisición que pretendía llevar a cabo una firma que menospreciaba las relaciones comunitarias.

En tiempos pasados, las “relaciones con la comunidad” las efectuaban sólo las grandes empresas multinacionales del hemisferio norte. Pero ahora son cada vez más las empresas de los países en desarrollo que las practican. Aracruz Celulose S.A. de Brasil produce más de un millón de toneladas por año de pulpa blanqueada de eucalipto, proveniente de sus plantaciones en el sur del país, realizadas sobre tierras que habían sido deforestadas por la actividad agrícola y la fabricación de carbón, algunas décadas atrás. Pero la empresa utiliza el 27% de sus tierras para plantar también árboles y otras especies vegetales oriundas de la región, no comercializables, a fin de preservar el ecosistema. Provee de plantines a los granjeros locales y les compra su producción maderera, también entrega plantines en forma gratuita para que los granjeros puedan cubrir sus propias necesidades de leña y madera sin destruir los bosques naturales de la zona. Entre 1992 y 1995, Aracruz invirtió U\$S 120 millones para combatir la contaminación del aire y del agua, y ha logrado obtener los certificados internacionales de control y aseguramiento de la calidad. Invirtió un total de U\$S 125 millones en la construcción de escuelas, hospitales y viviendas en la región, tanto para sus propios trabajadores como para terceros. E incluso desarrolla programas ambientales para proteger los ciclos reproductivos de cinco especies de tortugas de mar que se encuentran en peligro de extinción.

Gran parte de estas actividades redunda en interés de la empresa, como, por ejemplo, el esfuerzo por mantener sanos a sus trabajadores y sus familias y, además, brindarles un cierto nivel de educación. Aracruz también comprende que, por el solo hecho de estar trabajando en el sector de la explotación forestal y de operar fábricas de papel en el mundo en desarrollo, automáticamente llamará la atención de los grupos ambientalistas. Es por eso que considera que tiene que ser más “limpia” que otros productores forestales y fabricantes de papel que operan en sitios remotos de América del Norte. La firma gasta mucho dinero en difundir sus programas ambientales y sociales en el resto del mundo. A medida que el comercio y los mercados se vayan tornando más abiertos y globales, una creciente cantidad de empresas de los países en vías de desarrollo seguramente irá implementando estrategias similares.

## CÓMO LLEGAR A UN ACUERDO CON LA ECO-EFICIENCIA

Al abordar el tema del objetivo inmediato de la eco-eficiencia y el otro, más ambicioso, del desarrollo sostenible, los grupos empresarios tienen que tomar en cuenta una serie de temas complejos. Entre los mismos se incluyen aspectos como integrar en la cuenta de los resultados los costos ambientales, el principio “el que contamina, paga”, y un uso más amplio de los instrumentos económicos.

El concepto de integrar los costos ambientales a los resultados tiene un peso importante en la relación entre los mercados financieros y la eco-eficiencia. Durante la primera reunión del BCSD, en 1991, el grupo tuvo dificultades para determinar qué recomendaciones presentar en ECO' 92, en vista de las incertidumbres políticas, científicas y financieras que rodean a los temas del ambiente y del desarrollo. ¿Qué podía proponer un grupo de CEOs, todos ellos comprometidos con el sistema del mercado abierto, que pudiera ser realmente de ayuda?

Al respecto, uno de esos ejecutivos afirmó que, como el grupo abogaba por mercados abiertos y competitivos, se debía recomendar la internalización de los costos ambientales de modo tal que los mercados reflejaran en forma más real tanto las verdades ambientales como las económicas. Este concepto permitió al Consejo otorgar un enfoque lógico al debate.

El concepto es simple, pero la realidad es mucho más compleja. La idea es que el precio de un bien o de un servicio debería reflejar todos los costos asociados con el mismo. Por ejemplo, el costo de la electricidad proveniente de usinas alimentadas a carbón difícilmente refleje el costo de los daños infringidos al ambiente por la lluvia ácida que causa esa combustión, o el de los problemas de salud relacionados con la contaminación que provoca. Pero éstos son los costos reales. En los Estados Unidos se ha estimado que cada tonelada de dióxido de sulfuro lanzado a la atmósfera causa perjuicios en la salud por valor de más de U\$S 3.000 en las comunidades afectadas. De modo que las emisiones de dióxido de sulfuro que originan las usinas generadoras de electricidad del oeste medio de los Estados Unidos le cuestan a la sociedad unos U\$S 25 mil millones por año. Esta cifra es sólo una estimación aproximada, pero resulta claro que el tema implica mucho dinero contante y sonante y que alguien tiene que pagar estos costos que, tradicionalmente, han sido "externos" a las consideraciones financieras de dichas empresas.

Se diría que en la sociedad se observa un acercamiento inevitable hacia una mayor internalización de ese tipo de costos. A fines de 1994, la Comisión Real de Gran Bretaña para la Contaminación Ambiental recomendó que el precio de la nafta se duplicara durante la década siguiente. Afirmó que el costo que implica desplazarse con un automóvil tenía que aumentar porque, en la actualidad, “no refleja los daños infringidos a la salud y al ambiente”. Esta Comisión incluso llegó a sugerir que se utilice una nueva tecnología que permita que los surtidores de nafta “lean” los datos técnicos de los automóviles, de modo tal que el conductor de un vehículo que produce un alto grado de contaminación tenga que pagar más por su combustible.

Ya en 1972, los miembros de la OECD coincidieron en el principio “el que contamina paga” (PPP), según el cual, simplemente, quien daña el ambiente debe correr con el total de los costos con su producción de bienes y servicios. El principio, a pesar de que se encuentra cada vez más ampliamente aceptado, ha sido aplicado en forma desperejada. Los gobiernos subsidian incluso muchas formas de contaminación ambiental, como, por ejemplo, el uso excesivo e inadecuado de agua, energía, pesticidas y fertilizantes. A principios de 1994, el gobierno alemán renovó, hasta fines de este siglo, sus subsidios al carbón, que deberían haber expirado en 1995.

El BCSD ha respaldado el PPP y el concepto de incorporar los costos ambientales. El Consejo asentó en su libro *Cambiando el Rumbo* de 1992: “La piedra angular del desarrollo sostenible es un sistema de mercados abiertos y competitivos, en los cuales los precios deben reflejar los costos ambientales así como otros recursos.

El Consejo siguió respaldando la idea de incrementar el uso de instrumentos económicos para alcanzar estos objetivos. La principal herramienta de los gobiernos para lograr sus objetivos ambientales ha sido, tradicionalmente, las normas y regulaciones dirigidas y controladas por esos mismos gobiernos. Estas normas a menudo indican a una empresa, con toda precisión, qué tecnologías usar y qué sustancias pueden ser emitidas y en qué cantidades. Siempre existirá la necesidad de este tipo de restricciones en situaciones donde existen importantes riesgos e interrogantes. Sin embargo, los objetivos ambientales también pueden ser alcanzados a través de instrumentos económicos, tales como impuestos, tasas y permisos de comercialización. Cuando son aplicados correctamente, este tipo de instrumentos puede ser de gran utilidad para contribuir a la cobertura de cuatro necesidades: “Brindar incentivos para el logro de mejoras y recompensas continuas; utilizar los mercados en forma más efectiva al lograr los objetivos ambientales; encontrar formas más costo-eficientes, tanto para el gobierno como para la industria, a fin de alcanzar esos mismos objetivos; y pasar del control de la contaminación a su prevención”, de acuerdo con lo planteado en el libro *Cambiando el Rumbo*.

Una regulación sólo exige que las empresas alcancen un estándar determinado, pero luego no tiene más capacidad de acción. Un impuesto a una tasa punitiva sobre la contaminación o sobre la utilización de recursos naturales, en cambio, al tener un efecto constante sobre las pérdidas y ganancias de la empresa, la motiva para tornarse más eco-eficiente.

Existe un consenso cada vez mayor en cuanto a que la utilización de instrumentos económicos va en aumento y que, si estos instrumentos están bien configurados y son combinados adecuadamente con otros enfoques, se convierten en herramientas muy efectivas para esos fines. “Un ejemplo de los nuevos enfoques relativos a la gestión del ambiente es el uso creciente, en los últimos años, de instrumentos basados en el mercado, como, por ejemplo, cargos por contaminación o tasa e impuestos para los usuarios de bienes y servicios que afectan al ambiente”, acotó un informe del Programa del Ambiente de las Naciones Unidas. El concepto de utilizar instrumentos económicos para solucionar los problemas ambientales es determinante: de no encararse, en forma severa, la fijación de precios y las fallas de mercado, asociadas con la degradación del ambiente, las políticas ambientales seguirán funcionando a niveles insuficientes al tratar sólo los síntomas de los problemas ambientales, sin ocuparse de las causas económicas. “Los instrumentos basados en el mercado son los mejores, tanto en teoría como, a menudo, también en la práctica”, expresó el Banco Mundial en 1992. Actualmente, la mayoría está de acuerdo en que los instrumentos que se basan en el mercado han sido subutilizados. Prometen ser particularmente eficaces en países en vías de desarrollo, que no pueden darse el lujo de incurrir en costos adicionales innecesarios como los que suelen acarrear instrumentos menos flexibles, aceptados por los países de la OECD.

El sector empresario parecería coincidir con esto. “Lograr que las fuerzas del mercado trabajen para proteger y mejorar la calidad del ambiente –con la ayuda de estándares fundados en el desempeño y el adecuado uso de instrumentos económicos en un marco regulatorio armónico– es una de las más grandes oportunidades que tiene el mundo en esta década”, dijo la Cámara de Comercio Internacional en 1992.

Otra actividad “internalizadora” es la que se lleva a cabo a nivel nacional e internacional, a medida que los gobiernos buscan y experimentan distintas formas de lograr que las cuentas nacionales

reflejen mejor la realidad ambiental. Las cuentas nacionales estándar (SNAs) se rigen por normas acordadas internacionalmente, de modo que sean comparables. Sin embargo, se ha reconocido hace ya tiempo que actividades tales como gastar dinero en limpiar la contaminación o en el tratamiento de personas que padecen enfermedades causadas por la contaminación, incrementan el PBI, y un PBI en aumento muchas veces es considerado, erróneamente, un “progreso”. El dinero obtenido de la explotación de recursos naturales también aumenta el PBI, pero no se contabiliza el agotamiento de recursos tales como el petróleo, la madera, el agua o la capa de humus de las tierras cultivables. Cualquiera que lo piense un poco, se dará cuenta de lo absurdo de este enfoque. Es como si una persona estimara su fortuna tomando en cuenta sólo sus ingresos y no el valor neto ni los activos, como su hogar y sus ahorros. Es perfectamente posible incrementar el ingreso vendiendo los activos, pero esto, por lo general, sólo se hace tras cuidadosas evaluaciones. Sin embargo, a través de mediciones contables como el PBI, los países calculan lo bien que les va sin tener en cuenta la celeridad con que están gastando sus recursos clave. Países como Noruega, Francia y Japón han ensayado nuevas formas de contabilidad nacional que logran salvar algunas de estas deficiencias. La Organización de las Naciones Unidas, que es el ente regulador de las SNAs, también está trabajando en la elaboración de un nuevo sistema de contabilidad nacional. La modificación de estos registros hará necesario que los gobiernos soliciten a las empresas información cada vez más detallada sobre el uso de los recursos y la contaminación. La revelación de estos datos seguramente tendrá claros efectos sobre cómo los clientes habrán de evaluar a determinadas empresas y, a su vez, cómo las mismas serán evaluadas por los mercados financieros.

Otra idea, cuya hora parece aproximarse, es la de un “desplazamiento tributario”. También aquí la idea básica es sencilla: dejar paulatinamente de gravar –y, por lo tanto, desalentar– actividades positivas como el empleo y la creación de capital, y aumentar los impuestos sobre la contaminación y el mal uso de los recursos naturales y, de este modo, desalentar esas actitudes. En la realidad, sin embargo, es extremadamente difícil gravar impositivamente el mal uso de los recursos sin gravar también el uso de los mismos, en forma general. Las corrientes políticas de derecha afirman que elevar los impuestos sobre derivados del petróleo o, incluso, sobre el carbón, sería malo para la economía. La izquierda, por otra parte, aduce que esto sería malo para los sectores relativamente pobres de la población que, por lo común, gastan en calefaccionar sus hogares y proveer de combustible a sus vehículos un porcentaje más elevado de sus ingresos que las clases más acomodadas. Quienes están a favor de un desplazamiento de las cargas impositivas sostienen que es posible crear un sistema que beneficie a la economía y al ambiente, sin una carga impositiva exagerada para los pobres.

Hay un hecho que, probablemente, sintetice la razón por la cual cada vez más líderes políticos y empresarios están dispuestos a discutir –e incluso promover– la idea del desplazamiento tributario: la difusión amplia y generalizada del desempleo. Durante la década del ochenta, el ambiente fue el tema de preocupación básico que encabezaba las encuestas de opinión en Alemania. A fines de 1994, había descendido a un tercer lugar; el segundo estaba ocupado por la criminalidad, mientras que el desempleo encabezaba la lista de preocupaciones. En Alemania, los impuestos sobre el trabajo son más elevados que en la mayoría de los países, pero, en general, esa tasa es muy alta en toda Europa. Fue con el fin de disminuir el desempleo que el ex jefe de la Unión Europea, Jacques Delors –quien, por cierto, no es un fanático ambientalista–, solicitó una disminución del gravamen laboral y un incremento del impuesto a los recursos.

Los miembros del BCSD terminaron por no apoyar, en 1992, esta idea, en parte a causa de su carácter novedoso y en parte porque temían que cualquier impuesto a los recursos naturales y/o la contaminación se convirtiera en un nuevo impuesto agregado y no en un desplazamiento de ellos. En el libro *Cambiando el Rumbo* se insiste en la “neutralidad impositiva”: cualquier nuevo impuesto

relacionado con la contaminación ambiental deberá ser equilibrado con la reducción de otro impuesto.

Sin embargo, un informe del BCSD de 1994 exhortó a los gobiernos a adoptar una serie de estrategias nacionales para el desarrollo sostenible, incorporando “enfoques nuevos y flexibles basados en el mercado”, que incluían un “desplazamiento tributario desde el trabajo y las inversiones hacia las actividades de valor agregado contaminante o que generan un uso ineficiente de los recursos naturales”.

Tanto en los Estados Unidos como en Europa se ha discutido –y desechado– la idea del desplazamiento tributario. Pero hay una sensación, ampliamente difundida, de que el mismo será inevitable. Si otros CEOs cambian de opinión con la rapidez con que lo hicieron muchos de los que pertenecen al WBCSD, el desplazamiento tributario puede llegar a ser una realidad en gran parte del mundo, a fines de este siglo o en pocos años más.

## **TODO LO DICHO... Y LOS MERCADOS FINANCIEROS**

Imagínese, por un momento, que la mayor parte de los costos ambientales estuvieran internalizados a los resultados de modo tal que fueran cubiertos por las empresas y trasladados al consumidor. Imagínese que los gobiernos hicieran un mayor uso de los instrumentos económicos a su alcance para premiar en forma continua a aquellas empresas que van logrando ser más y más eco-eficientes, castigando a aquellas otras que no lo son. Imagínese que un número cada vez mayor de gobiernos reviera sus sistemas contables nacionales, a fin de que los mismos reflejaran con exactitud los daños ambientales y el agotamiento de los recursos naturales. Por último, imagínese un desplazamiento tributario que desalentara la contaminación y el abuso en la utilización de los recursos naturales.

Con todo lo dicho, no resulta difícil imaginar que los balances de las empresas también cambiarían en forma notable. Sectores empresarios enteros cambiarían la modalidad de hacer negocios. A medida que se fueran produciendo estos cambios, los mercados financieros cambiarían la base sobre el cual decidir si invertir o no en una empresa, si asegurarla o no, o si otorgarle o no el préstamo solicitado. Los mercados financieros no tendrían que preocuparse por “el ambiente”; podrían suponer, con lógica, que una empresa financieramente exitosa en un mundo de costos ambientales internalizados y con una política tributaria que castigue la contaminación, también sería una empresa eco-eficiente.

Esto es algo que no se producirá con rapidez. Hasta sería un error que una serie de medidas tan complejas fuera implementada en forma demasiado acelerada. Las empresas en general, y el WBCSD en particular, quieren ver una incorporación gradual de estos conceptos, programada y con cambios previsibles, que les dé tiempo para la planificación y la adecuación a las nuevas reglas de juego.

Las distintas tendencias presentadas aquí –costos ambientales integrados a los resultados, mayor uso de los instrumentos económicos, nuevos sistemas para las contabilidades nacionales, nuevas bases para la política impositiva, nueva atención a los mercados financieros por parte de los “verdes”– conforman, sin duda, la dirección hacia la cual se mueve la sociedad. Las empresas más previsoras y conscientes del futuro ya están invirtiendo en eco-eficiencia para luego unirse a asociaciones que reclaman una mayor cantidad de instrumentos económicos y la internalización de los costos ambientales, a fin de que sus inversiones se tornen rentables a la mayor brevedad posible. Este cambio –como todos los grandes cambios sociales– tendrá sus marchas y

contramarchas y se producirá más rápidamente en algunos lugares y sectores empresarios que en otros. Pero las empresas que no sigan el ritmo de estos cambios, sin duda sufrirán. Como también lo harán quienes queden rezagados dentro de la comunidad financiera. Se verán más expuestos a riesgos y responsabilidades y perderán importantes oportunidades de negocios si no saben ver la relación que existe entre calidad ambiental y calidad financiera.

Al comienzo de este capítulo hemos expresado nuestra preocupación en cuanto a que los mecanismos de los mercados financieros alientan las políticas a corto plazo. Pero los directivos de los fondos comunes de pensiones están haciendo inversiones para clientes que obtendrán los beneficios correspondientes sólo dentro de algunas décadas. Es muy probable que estas tendencias, dentro de apenas diez años, hayan de modificar en forma importante las estrategias básicas de muchas empresas. Es por eso que los actores más progresistas del mercado financiero comenzarán a tener en cuenta hoy las implicancias del desarrollo sostenible, en lugar de esperar a que ellas les sean impuestas por modificaciones fiscales, legales, y por los cambios en el mundo de los negocios.

“En cierta forma, esto no requiere demasiada imaginación”, escribió Richard House en *Institutional Investor*. Si se cree en el avance del libre mercado, y si se reconoce que toda actividad económica tiene un costo ambiental por el cual las empresas, cada vez más (aunque sea en forma imperfecta) son consideradas responsables, ¿no sería lógico que los mercados financieros empezaran, sistemáticamente, a considerar esos costos cuando evalúan una empresa? Hoy en día, en el caso de las adquisiciones, ésta ya es una práctica de rutina.

En el próximo capítulo analizaremos en forma muy general el papel de los mercados financieros en el desarrollo económico sostenible, en los países en vías de desarrollo. A continuación, en la Parte II, veremos de qué manera las tendencias aquí discutidas afectan a diversos actores clave, dentro de la comunidad financiera. La Parte III, por último, ofrece un sumario de algunos de los temas tratados en el presente libro.

## Resumen del Capítulo 1

¿Apoyan los mercados financieros el desarrollo sostenible, es decir, formas de desarrollo que permitan al hombre de hoy y del futuro satisfacer sus necesidades? Hay razones para suponer que no es así y que, probablemente, alienten objetivos a corto plazo, subvaloren los recursos naturales y ambientales, descuenten el futuro y favorezcan sistemas de contabilidad y de información económico-financiera que no reflejen ni los riesgos ni las oportunidades ambientales.

Se trata de una temática acuciante, porque las decisiones sobre inversiones que se tomen hoy tendrán marcada incidencia en el desarrollo de las próximas décadas, en las que la población mundial crecerá de manera acelerada y miles de millones de personas ingresarán en la economía de mercado.

Las empresas que utilizan y venden recursos naturales y las que generan contaminación ambiental se han ocupado de los temas relacionados con el desarrollo sostenible desde hace mucho más tiempo que las compañías que operan con acciones, realizan actividades bancarias o trabajan en seguros. Dichas empresas han ido desarrollando, el concepto de la eco-eficiencia, es decir, incrementar el valor agregado y, al mismo tiempo, disminuir la contaminación y el uso inadecuado de los recursos ambientales.

Actualmente, muchas empresas están tratando de adecuarse a los cambios que se producen en lo referente al cuidado del ambiente. Por ejemplo al tener que asumir el principio “el que contamina, paga” se obligarán a reflejar en sus estados contables el costo del daño ambiental que han generado, adaptarse a la generalización del uso de instrumentos económicos que premian la eco-eficiencia y castigan al contaminante y, en un futuro muy cercano, a posibles cambios en las estructuras impositivas y en los sistemas contables nacionales.

Todas estas tendencias habrán de modificar las estrategias comerciales de las empresas, obligando a los actores en los mercados financieros a tomar estos aspectos en consideración, modificando los parámetros de evaluación de sus clientes.